

Diplomado
Problemas de Ética Jurídica y Judicial Electorales

La ética
en la interpretación convencional

1. La ética

2. Modificaciones en la reforma constitucional de 2011. Conceptos

3. Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el marco normativo nacional

4. Principios rectores de los Derechos Humanos.

5. Interpretación conforme y el principio pro persona. El bloque de constitucionalidad y el parámetro de constitucionalidad

6. Obligación de las autoridades de respetar los Derechos Humanos

7. Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

1. La ética

El poder que se confiere **a cada juez** trae consigo determinadas **exigencias** que serían **inapropiadas para el ciudadano común** que ejerce poderes privados; **la aceptación de la función judicial** lleva consigo **beneficios y ventajas**, pero también **cargas y desventajas**.

Desde esa perspectiva de una sociedad mandante se comprende que **el juez no solo debe preocuparse por "ser"**, según la dignidad propia del poder conferido, **sino también por "parecer"**, de manera de **no suscitar legítimas dudas en la sociedad** acerca del **modo** en el que se cumple **el servicio judicial**.

Código Iberoamericano de ética Judicial. Disponible en:
<http://www.cumbrejudicial.org/productos-y-resultados/productos-axiologicos/item/33-codigo-iberoamericano-de-etica-judicial>

El Derecho ha de orientarse **al bien o al interés general**, pero en el ámbito de **la función judicial** adquieren una **especial importancia ciertos bienes e intereses de los justiciables, de los abogados y de los demás auxiliares y servidores de la justicia**, que necesariamente han de tenerse en consideración.

La ética judicial debe proponerse y aplicarse **desde una lógica ponderativa** que busca **un punto razonable de equilibrio entre unos y otros valores**: si se quiere, **entre los valores del juez en cuanto ciudadano** y en cuanto **titular de un poder**, cuyo ejercicio repercute en los bienes e intereses de individuos concretos y de la sociedad en general.

Código Iberoamericano de ética Judicial. Disponible en:
<http://www.cumbrejudicial.org/productos-y-resultados/productos-axiologicos/item/33-codigo-iberoamericano-de-etica-judicial>

El ejercicio de la función judicial no debe, obviamente, ser arbitrario, pero en ocasiones es inevitable que el juez ejerza un poder discrecional. Esa discrecionalidad judicial implica innegables riesgos que no pueden solventarse simplemente con regulaciones jurídicas, sino que requieren el concurso de la ética.

Parece así adecuado que, a la hora de plantearse el nombramiento o la promoción de los jueces, o de enjuiciar su conducta en cuanto jueces, se tengan en cuenta aquellas cualidades o hábitos de conducta que caracterizan a la excelencia profesional y que van más allá del mero cumplimiento de las normas jurídicas.

Las constituciones contemporáneas contienen un marco general de aquella dimensión ética implicada en el servicio judicial, especialmente cuando indican quienes pueden ser jueces o cuando procede su destitución. De ese modo, la ética judicial encuentra asidero constitucional, en cuanto supone una explicitación de aquellos enunciados constitucionales.

Código Iberoamericano de ética Judicial. Disponible en:
<http://www.cumbrejudicial.org/productos-y-resultados/productos-axiologicos/item/33-codigo-iberoamericano-de-etica-judicial>

La formulación de un **Código de Ética Judicial** puede ser una fuente muy importante de **clarificación de conductas**. Obviamente, porque un Código de Ética Judicial, como cualquier ordenamiento, supone una división de la conducta que pretende regular en lícita e ilícita y, de esta manera, sirve de guía para sus destinatarios.

Pero también porque, en ocasiones, **dentro de las conductas éticamente admisibles, los Códigos optan**, por razones de oportunidad y de coordinación, **por un determinado curso de acción, de entre varios posibles; por ejemplo**, a pesar de que en principio podría haber diversas opciones para establecer **el modo en que es éticamente autorizado que el juez se reúna con los abogados de las partes**, el hecho de que un Código escoja una de ellas despeja las dudas que legítimamente pueden suscitarse entre sus destinatarios.

Código Iberoamericano de ética Judicial. Disponible en:
<http://www.cumbrejudicial.org/productos-y-resultados/productos-axiologicos/item/33-codigo-iberoamericano-de-etica-judicial>

Desde la lectura comparada de los Códigos de Ética Judicial vigentes es posible identificar ciertas **exigencias centrales** que muestran una importante concentración del modo en que se pretende la prestación del servicio de justicia de manera excelente o completa.

Esos **núcleos concentradores de la ética judicial** reciben distintos nombres, pero **parece aconsejable insistir** -de conformidad con los documentos iberoamericanos ya aprobados **en la denominación de "principios"**, dado que ellos **reclaman cierto perfil intrínseco valioso** cuya concreción histórica queda sujeta a **posibilidades y circunstancias** de tiempo y lugar.

Código Iberoamericano de ética Judicial. Disponible en:
<http://www.cumbrejudicial.org/productos-y-resultados/productos-axiologicos/item/33-codigo-iberoamericano-de-etica-judicial>

Los "**principios éticos**" configuran **el repertorio de las exigencias nucleares de la excelencia judicial**, pero como tales pueden justificar diferentes normas en donde se especifiquen distintas conductas en relación a determinadas circunstancias.

Así, por ejemplo, **la independencia** es inequívocamente uno de esos "**principios**", y desde ella es posible delinear normas que, de manera más concreta, modalicen conductas exigibles.

Esos principios, al procurar modelar el ideal del mejor juez posible, no solo **reclaman ciertas conductas** sino que alientan que, tras la reiteración de las mismas, **se arraiguen en hábitos beneficiosos**, facilitadores de los respectivos comportamientos **y fuente de una más sólida confianza ciudadana.**

Código Iberoamericano de ética Judicial. Disponible en:
<http://www.cumbrejudicial.org/productos-y-resultados/productos-axiologicos/item/33-codigo-iberoamericano-de-etica-judicial>

2. Modificaciones en la reforma constitucional de 2011. Conceptos

Título Primero
Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1o.

En los Estados Unidos Mexicanos **todas las personas** gozarán de **los derechos humanos reconocidos** en esta Constitución y en **los tratados internacionales** de los que el Estado Mexicano sea parte, así como **de las garantías** para su protección, cuyo ejercicio **no podrá restringirse ni suspenderse**, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos **se interpretarán de conformidad** con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia **favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia**.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de **promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos** de conformidad con **los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad**. En consecuencia, el Estado deberá **prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos**, en los términos que establezca la ley. [...]

Texto anterior a la reforma	Texto reformado en 2011
<p>Título Primero Capítulo I De las Garantías Individuales</p>	<p>Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías</p>

Derechos humanos: potestades inseparables e inherentes del hombre.
(iusnaturalismo)

Derechos fundamentales: Son los derechos humanos que están previstos o positivizados en el texto constitucional. Es decir, el Estado los *reconoce* en su Constitución como anteriores a él, para respetarlos y garantizarlos a través de sus propios mecanismos de tutela.

Garantías individuales: son la medida individualizada y concreta en que la Constitución protege cada uno de los derechos.
Son los medios e instrumentos jurídicos, de naturaleza procesal, que tienen como finalidad proteger los derechos.

¿Apertura del debate sobre los derechos de las personas jurídicas?

- **Reconoce** los **principios** de **universalidad e igualdad** de los derechos humanos
- **Persona:** es entendida como **todo ser humano** titular de **iguales** derechos y deberes
- Emanados de su común **dignidad** y en los casos en que sea aplicable **deben ampliarse**

Sesión 8 de marzo de 2011. Cámara de Senadores debate del desarrollo de la reforma: “Detrás de los **derechos individuales** se hallan los **colectivos**, en otro sentido, dentro del marco de los colectivos se encuentran los correspondientes a los individuos. El reconocimiento y la protección a los **derechos colectivos** se convierte en condición para la tutela de **los derechos humanos**, por ejemplo: la propiedad de las comunidades indígenas y sus integrantes.” (García 2011, 80)

- Tránsito del **positivismo al iusnaturalismo**.
- No se tiene a los derechos atribuidos por el poder público, sino **son reconocidos por el Estado, preexistentes a él**.
- Se reconocen **sólo los previstos** en el **ordenamiento nacional** y en los **tratados internacionales** ratificados por el Estado mexicano.
- Los derechos **no son producto de la concesión del Estado ni de un acto legislativo**, sino constituyen **un ámbito de libertad** del ser humano que **debe ser amparado** por el Derecho y por las instituciones estatales.

3. Tratados internacionales de Derechos Humanos en el marco normativo nacional

- Incorpora a los Derechos Humanos reconocidos en tratados internacionales (elevación del rango de los tratados internacionales de DDHH y la relación con obligaciones de homologación y diálogo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

Función complementaria \implies en ocasiones contemplan derechos todavía no reconocidos o no reglamentados expresamente en el ordenamiento jurídico nacional.

- Recepción constitucional de los tratados. Artículos 1 y 133 constitucionales.
- Se plasman las obligaciones y principios internacionales.
- Recepción nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
- Reconstrucción del derecho interno a la luz de los derechos y en base al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Jerarquía de los tratados internacionales de Derechos Humanos respecto a la Constitución y las leyes ordinarias

1. Supranacionalidad



Las disposiciones contenidas en los TIDH, **brindan mayor protección** a los individuos. Tienen **preferencia aplicativa** sobre otra disposición jurídica, incluyendo la Constitución. Se aplica la más favorable a la persona (***pro homine***)

2. Constitucionalidad

- Elevar a **rango constitucional** a los TIDH: fortalece los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos contenidos en ellos.
- **Vincula** todo el ordenamiento jurídico **a los derechos contenidos en los TIDH**
- **Nulifica** los actos del poder público **que violen los derechos** contenidos en los **tratados**
- Incorpora los tratados al **bloque de constitucionalidad**
- Establece la **obligación de los jueces de aplicar los TI**
- Garantiza la **aplicación de la jurisprudencia internacional**
- Da **protección** a las normas contenidas en los TIDH, a través de **los medios de control constitucional**

Jerarquía de los tratados internacionales de Derechos Humanos respecto a la Constitución y las leyes ordinarias

3. Supralegal

El tratado internacional se sitúa **por debajo** al de la **Constitución**, pero **superior** a las **leyes ordinarias**

Sistema Universal de los Derechos Humanos

- Declaración Universal de Derechos humanos .**
- Los Tratados Universales de Derechos Humanos: **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**
- Instrumentos sobre Derechos Humanos dedicados a **derechos o principios específicos** o de **derechos** de determinados **sectores** de la sociedad humana (**niños, indígenas, mujeres, etcétera**)

- Alto comisionado de los Derechos Humanos.
- Comité de Derechos Humanos (CCPR).
- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).
- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR). Comité contra la Tortura (CAT).
- Comité de los Derechos del Niño (CRC)
- Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW)
- Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)
- Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED)

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
- Los Tratados Regionales de Derechos Humanos: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- Instrumentos sobre Derechos Humanos dedicados a derechos o principios específicos o de derechos de determinados sectores de la sociedad humana (niños, indígenas, mujeres, etcétera)

Instituciones interamericanas de protección de los Derechos Humanos

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (**Comisión IDH**)
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (**Corte IDH**)

4. Principios rectores de los Derechos Humanos

- Universalidad:** pertenecen por igual a todo ser humano, más allá de cualquier frontera territorial o límite social, racial, étnico, cultural político o económico.
- Inalienabilidad:** no pueden enajenarse. Son intransmisibles a otra persona por préstamo o venta, ni pueden apropiarse por parte del estado.
- Indivisibilidad:** no pueden dividirse, son absolutos.
- Interdependencia:** el no reconocimiento de uno de ellos pone en riesgo a los demás.
- Progresividad:** no pueden ser restrictivos sino evolutivos. Opera de acuerdo a los cambios sociales e históricos de cada país.

5. Interpretación conforme
y el principio *pro-persona*.
Bloque de constitucionalidad y
parámetro de constitucionalidad

la tarea de **interpretación** resulta, por un lado, **extraordinariamente compleja** (justamente, debido a las **diversas** —y en ocasiones opuestas— **teorías interpretativas** existentes), y por otro, **generadora de graves riesgos institucionales** (fundamentalmente, riesgos de abuso y discrecionalidad judicial)

Gargarella, Roberto. De la alquimia interpretativa al maltrato constitucional. La interpretación del derecho en manos de la Corte Suprema Argentina, página 53. Disponible en:
<https://www.google.com/search?q=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&oq=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&aqs=chrome..69i57.28174j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

“II. La **descripción** de la **práctica interpretativa** de la **Corte Suprema argentina** según Sagüés.”

“... a lo largo de su historia, la Corte Suprema Argentina **utilizó** en sus decisiones una **amplia gama de recursos interpretativos**. Según Sagüés, dichos recursos incluyen **variaciones** como las siguientes:

Interpretación literal. Conforme a la misma, a la hora de interpretar el derecho los intérpretes deben seguir, ante todo —y mientras la misma sea clara— “la letra de la ley” (i.e., CSJN, Fallos 324: 1740, 3143, 3345).

Interpretación popular. En otras ocasiones la Corte sugiere “leer” las palabras de la ley de un modo lo más cercano posible al entendimiento más común o “popular” de las mismas (i.e., CSJN, “Afip c. Povoło,” Fallos 324:3345)

Gargarella, Roberto. De la alquimia interpretativa al maltrato constitucional. La interpretación del derecho en manos de la Corte Suprema Argentina, pagina 54. Disponible en:

<https://www.google.com/search?q=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional+al.+Gargarella&oq=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&aqs=chrome..69i57.28174j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Interpretación especializada. En ciertas circunstancias, la Corte ha preferido interpretar las normas de un modo más técnico, es decir, de acuerdo con “la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico en el que dicha ley se inserta” (i.e., CSJN, Fallos 320:2319).

Interpretación intencional. A veces, la Corte sugiere dejar de lado interpretaciones cercanas al texto de la ley, como las anteriores, para inclinarse por otras vinculadas con la intención que, según se estima, tuvieron los creadores de la norma al dictarla (i.e., CSJN Fallos 323: 3139). Sin embargo, aclara Sagüés, la Corte ha sugerido, en ocasiones, optar por esta vía sólo de modo excepcional, mientras que en otros casos ha actuado como si dicha opción fuera la más obvia (i.e., CSJN, Fallos 323: 212).

Gargarella, Roberto. De la alquimia interpretativa al maltrato constitucional. La interpretación del derecho en manos de la Corte Suprema Argentina, página 54 y 55. Disponible en:

<https://www.google.com/search?q=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&oq=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&aqs=chrome..69i57.28174j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Interpretación voluntarista. De modo similar, en ocasiones la Corte ha propuesto como primera regla interpretativa la de “respetar la voluntad del legislador,” evitando la tentación de reemplazarlo (CSJN, Fallos 324: 1481). Para conocer la voluntad expresada por el legislador, la Corte ha recomendado, ante todo, la lectura de los debates parlamentarios.

Interpretación justa. De modo más radical, en ciertos casos la Corte sostuvo que la interpretación “auténtica” de la ley era la que seguía fundamentales principios de justicia (i.e., CSJN, Fallos 322: 1699). De modo similar, en ocasiones ha hecho referencia a la necesidad de seguir la “recta razón” de la Constitución, es decir a la necesidad de guiarse por lo que determine una aplicación “racional” de la misma. Ello así, aún cuando interpretar las normas de ese modo implique desviarse de lo que parece ser el sentido natural de las palabras de la ley (i.e., CSJN “YPF v. Corrientes”, Fallos 3315: 158).

Gargarella, Roberto. De la alquimia interpretativa al maltrato constitucional. La interpretación del derecho en manos de la Corte Suprema Argentina, página 55. Disponible en: <https://www.google.com/search?q=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&oq=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&q=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&qs=chrome..69i57.28174j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Interpretación orgánico-sistemática. La Corte propuso también apartarse de lo dicho expresamente por la norma cuando ello sea necesario para respetar el sentido pleno u orgánico de la Constitución –es decir, el sentido que se inferiría del juego armónico de los distintos artículos que componen la Constitución (i.e., CSJN, “Chadid” Fallos 291: 181).

Interpretación realista. En ocasiones, la Corte sugirió acercarse a la letra de la norma haciendo prevalecer la “verdadera esencia jurídica y económica” de forma tal que —según Sagués— en caso de existir diferencias entre “la denominación dada a algo por el autor de la norma, y la realidad, deberá prevalecer esta última” (i.e., CSJN, Fallos 318: 676).

Gargarella, Roberto. De la alquimia interpretativa al maltrato constitucional. La interpretación del derecho en manos de la Corte Suprema Argentina, página 55.

Disponible

en <https://www.google.com/search?q=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&oq=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&aqs=chrome..69i57.28174j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>:

Interpretación que asume la existencia de un legislador perfecto. Por otra parte, ha sido habitual que la Corte se acerque a las normas presuponiendo, detrás las mismas, la existencia de un legislador perfecto, lo que **implica presumir que el derecho es claro, preciso, coherente, sin lagunas** (i.e., CSJN Fallos 324: 2153).

Interpretación dinámica. En otros casos, la Corte ha propuesto ir más allá de (una mayoría de) criterios como los citados —criterios que la llevarían a “mirar hacia atrás,” en busca de los orígenes de la norma— para proponer **una interpretación “dinámica” que “actualice” el sentido de la Constitución, adecuándola a “la realidad viviente” de la época** (i.e., CSJN “Chocobar,” Fallos 310: 3267).

Gargarella, Roberto. De la alquimia interpretativa al maltrato constitucional. La interpretación del derecho en manos de la Corte Suprema Argentina, página 55. Disponible en:

<https://www.google.com/search?q=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&oq=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&aqs=chrome..69i57.28174j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Interpretación teleológica. Descartando posibilidades como las anteriores, la Corte ha sugerido a veces tomar como primer criterio interpretativo el relacionado con los “fines” perseguidos por la Constitución (i.e., CSJN, Fallos 311: 2751).

Interpretación conforme a la autoridad externa. En ciertos casos, la Corte ha tomado como criterio rector de sus decisiones las opiniones de la doctrina o, fundamentalmente, la jurisprudencia extranjeras (i.e., CSJN, Fallos “Lino de la Torre” 19: 236). En una mayoría de casos, la jurisprudencia que se ha tomado en cuenta es la norteamericana, aunque en materia de tratados internacionales —dice Sagüés— la influencia que ha predominado es la proveniente de la Corte Interamericana de derechos humanos (i.e., CSJN “Ekmedjián c. Sofovich” La Ley 1996- E-409).

Gargarella, Roberto. De la alquimia interpretativa al maltrato constitucional. La interpretación del derecho en manos de la Corte Suprema Argentina, páginas 55 y 56. Disponible en:
<https://www.google.com/search?q=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&oq=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&aqs=chrome..69i57.28174j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Interpretación constructiva. La Corte sostuvo a veces que, a la hora de interpretar el derecho, era necesario **optar por una lectura capaz de mantener a salvo los poderes del Estado**, facilitando su eficaz desempeño (i.e., CSJN, “Verrocchi” Fallos 322:2598).⁴

Interpretación “continuista”. A veces, la Corte enfatizó **la necesidad de que la decisión del caso sea fundamentalmente compatible con el respeto de los precedentes judiciales** (i.e., CSJN “González c. Ansés” Fallos 323: 555). Sin embargo, destaca Sagués, **en otros casos sostuvo todo lo contrario**, afirmando que **el precedente debía ser dejado de lado cada vez que el mantenimiento del mismo se mostrara inconveniente** (i.e., CSJN, “Almaraz” Fallos 317: 312).

Gargarella, Roberto. De la alquimia interpretativa al maltrato constitucional. La interpretación del derecho en manos de la Corte Suprema Argentina, página 56. Disponible en:

<https://www.google.com/search?q=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&oq=De+la+alquimia+interpretativa+al+maltrato+constitucional.+Gargarella&aqs=chrome..69i57.28174j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Interpretación constructiva. La Corte sostuvo a veces que, a la hora de interpretar el derecho, era necesario **optar por una lectura capaz de mantener a salvo los poderes del Estado**, facilitando su eficaz desempeño (i.e., CSJN, “Verrocchi” Fallos 322:2598).⁴

Interpretación “continuista”. A veces, la Corte enfatizó **la necesidad de que la decisión del caso sea fundamentalmente compatible con el respeto de los precedentes judiciales** (i.e., CSJN “González c. Ansés” Fallos 323: 555). Sin embargo, destaca Sagués, **en otros casos sostuvo todo lo contrario**, afirmando que **el precedente debía ser dejado de lado cada vez que el mantenimiento del mismo se mostrara inconveniente** (i.e., CSJN, “Almaraz” Fallos 317: 312).

Interpretación objetiva. También ha sido común que la Corte diga que la norma debe ser interpretada, ante todo, **teniendo en cuenta el sentido “objetivo” de la misma**, lo que implica afirmar —a contrario sensu— que **debe rechazarse toda posibilidad de interpretar** a la misma **conforme a criterios “subjetivos”** (CSJN, “Volpe” Fallos 316: 352).

Gargarella, Roberto. De la alquimia interpretativa al maltrato constitucional. La interpretación del derecho en manos de la Corte Suprema Argentina, página 56. Disponible en:

a) armonización del **derecho nacional** con las **disposiciones internacionales**

b) **aplicación subsidiaria** del ordenamiento **internacional** con el objeto de **llenar los vacíos** existentes, **sin derogar o desaplicar** una norma.

c) **interpretación jurídica a cargo de todas las autoridades.**

d) **buscar la mayor protección de los derechos humanos**, que puede estar en el derecho interno o en el internacional

e) se busca **conciliar la norma secundaria con la constitucional**, evitando una declaración general de inconstitucionalidad.

Acudir a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva:

- Para **reconocer derechos** protegidos.
- Para **reconocer** la norma o **interpretación más restringida** en el caso de establecer **restricciones permanentes** al ejercicio de los derechos o a **su suspensión** extraordinaria.

Emplear **la norma más favorable** a la persona, tanto en la aplicación, como en la creación de las normas.

Dos variantes:

1.- Preferencia interpretativa: se busca la interpretación que **optimice** más un derecho constitucional.

- **Las limitaciones legales** a los derechos humanos **no deben ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo.**
- Se debe interpretar la norma de modo que **optimice** su ejercicio

2.- Preferencia de normas:

El juez aplica la norma **más favorable a la persona**, con independencia de su jerarquía formal

“... el **bloque de constitucionalidad** representa la **unidad inescindible y permanente de derechos fundamentales de fuente constitucional e internacional** reconocidos por el **ordenamiento jurídico mexicano**, caracterizados por estar **elevados al máximo rango normativo** y, como consecuencia, **compartir el mismo valor constitucional**, sin que ninguno de ellos tenga una **preeminencia formal sobre los otros.**”

Astudillo, César. El bloque y el parámetro de constitucionalidad en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 121. Disponible en:

<https://www.google.com/search?q=que+es+el+bloque+de+constitucionalidad+en+m%C3%A9xico&aq=chrome.3.69i57j0l7.27758j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

“... el **parámetro de constitucionalidad** representa la **agregación eventual de derechos fundamentales adscritos al bloque de la constitucionalidad**, de **criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales** y de **disposiciones jurídicas sustantivas, procesales y orgánicas** de carácter **subconstitucional** que, **en conjunto** se erigen como **criterio o canon de enjuiciamiento** para la **resolución judicial** de controversias de **contenido constitucional.**”

Astudillo, César. El bloque y el parámetro de constitucionalidad en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 121. Disponible en:

<https://www.google.com/search?q=que+es+el+bloque+de+constitucionalidad+en+m%C3%A9xico&aq=chrome.3.69i57j0l7.27758j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

*6. Obligación de las autoridades
de respetar los Derechos
Humanos.*

Sistema de control de la constitucionalidad de leyes

- El 14 de julio de 2011, **el Pleno de la SCJN** emitió la resolución relativa a la participación del Poder Judicial de la Federación en la **ejecución de la sentencia** de la **CIDH** sobre el **caso Rosendo Radilla**
- Se reconoce la **obligación** de llevar a cabo el **control de constitucionalidad y de convencionalidad** para **“todas las autoridades”**
- Se da un **cambio de paradigma** para entrar a un **sistema de control difuso** de constitucionalidad

Mecanismo que se ejerce para **verificar** que una **ley, reglamento o acto de las autoridades del Estado**, se ajusten a las normas, los **principios y obligaciones** de la **Convención Americana de Derechos Humanos** principalmente, en la que se funda la **competencia contenciosa** de la **Corte IDH**.

Es **la revisión para constatar** que **la conducta** de los órganos que son revisados **está de acuerdo** con el tratado internacional y demás disposiciones aplicables en el caso en cuestión.

“ Un estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, **sus jueces**, como parte del aparato del Estado, **también están sometidos a ella**, lo que les obliga **a velar** porque los efectos de las disposiciones de la Convención **no se vean mermadas** por la aplicación de **leyes contrarias** a su **objeto y fin**”

(Caso Almonacid Arellano y otros vs Perú)

El poder judicial debe ejercer una especie de **“control de convencionalidad”** entre **las normas jurídicas internas** que aplican en los casos concretos **y la Convención Americana de Derechos Humanos**

Equivale, en su ámbito, al **control de constitucionalidad** que ejercen los **Tribunales constitucionales** (o todos los tribunales en control difuso)

Cualquier autoridad interna está **obligada a aplicar** las disposiciones de orden internacional **y a ejercer el control de convencionalidad**, *ex officio*, **entre las normas internas y la Convención Americana.**

El control de convencionalidad **se debe extender, a las demás convenciones interamericanas de derechos humanos** que fundamenten **la competencia** de la Corte Interamericana y que establezcan **obligaciones** para el Estado mexicano.

Se somete a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Realizar **el control de convencionalidad**, implica no sólo observar, confirmar o inaplicar una norma de acuerdo a los “**parámetros**” o “**estándar mínimo**” **del ius commune**, sino que consiste en una **serie de pasos** que los “**controladores**”, los **jueces**, y **otras autoridades** deben **realizar** al enfrentarse a resoluciones o toma de decisiones que involucren la protección de los **derechos humanos**.

En el ejercicio del **control de convencionalidad**, los estados pueden formar su propio conjunto de normas, “**corpus iuris**”, el cual, para realizar **el “control difuso de convencionalidad”** (que como mínimo comprende la CADH, sus protocolos adicionales y la jurisprudencia de la Corte IDH), puede ser **válidamente ampliado en sede nacional cuando se otorgue mayor efectividad al derecho humano en cuestión** (Ferrer, 2011:532).

La CoIDH :

“todos los órganos” de los Estados que han ratificado la CADH, “incluidos los jueces”, deben realizarlo. Deben velar por **el efecto útil del Pacto**, y que “los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles” **están obligados a ejercer de oficio, el “control de convencionalidad”**. La doctrina del “control de convencionalidad” **se debe ejercer por “todos los jueces”**, independientemente de su **formal pertenencia o no al Poder Judicial** y sin importar **su jerarquía, grado, cuantía o materia** de especialización.

59. “[...] las obligaciones convencionales de los Estados Parte **vinculan a todos los poderes y órganos del Estado**, es decir, que **todos los poderes** del Estado (ejecutivo, Legislativo, Judicial u otras ramas del poder público) **y otras autoridades públicas o estatales, de cualquier nivel, incluyendo a los más altos tribunales de justicia de los mismos**, tienen **el deber de cumplir de buena fe con el derecho internacional.**”

65. “[...] cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, **todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin**, de modo que **decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales**. Es decir, **todas la autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad”** entre las **normas internas y la Convención Americana**, en el marco de sus respectivas **competencias** y de las **regulaciones procesales** correspondientes.”

- Aplica en **todos los elementos considerativos** de la sentencia (competencia, procedencia, fondo, efectos).
- Constituye el **cumplimiento de la obligación del tribunal** de determinar el derecho aplicable al caso, **verificando la validez de las normas** que se pretenda aplicar (invocadas por las partes o consideradas por el tribunal).
- Principio** de que el tribunal **conoce el derecho**.
- Se basa **en el principio de jerarquía**: las normas inferiores deben respetar y cumplir los principios y límites establecidos en las normas superiores y los jueces no deben aplicar normas que violen ese principio porque afectarían el derecho humano a la legalidad.
- No significa** que el tribunal **haga declaración de invalidez** de la norma; **sólo la desaplica en el caso concreto**.

- 1.- **Identificar** las normas aplicables al caso.
- 2.- **Contrastar** cada norma con la superior.
- 3.- Al hacer la **verificación** y considerar la **interpretación más favorable a la persona** (ser humano) conforme al **principio *pro persona*** y conforme a los **principios constitucionales y de tratados internacionales**.
- 4.- Si la norma admite una **interpretación conforme**, aplicar ésta.
- 5.- Si la norma **no admite interpretación conforme**, considerarla **inválida** por ser contraria a la Constitución o al tratado y **desaplicarla**.

Se recomienda **comenzar de arriba hacia abajo**; es decir, verificar primero la constitucionalidad del tratado, luego la constitucionalidad y convencionalidad de la ley federal o local, luego la constitucionalidad y convencionalidad del reglamento; a continuación, la legalidad del reglamento y así sucesivamente.

El expediente Varios 912/2010 de la SCJN: El modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad

TRIBUNAL ELECTORAL del Poder Judicial de la Federación

Tipo de control	Órgano y medios de control	Fundamento constitucional	Posible resultado	Forma
Concentrado	Poder Judicial de la Federación (tribunales de amparo): a) Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad b) Amparo indirecto c) Amparo directo	Artículo correspondiente a) 105, fr. I y II b) 103, 107, fr VII c) 103, 107, fr IX	Declarar la inconstitucionalidad con efectos generales o inter-partes No declararla	Directa
Control por determinación constitucional específica	a) TEPJF en JRC de actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades locales en organización y calificación de comicios o controversias en ellos	---	No hay declaratoria de inconstitucionalidad, sólo inaplicación	Directa incidental
Difuso	Resto de los tribunales: a) Federales: Juzgados de distrito y Tribunales Unitarios de proceso federal y Administrativos; b) Locales: Judiciales, administrativos y electorales	Artículo: a) 1º, 133, 104 y DDHH en tratados b) 1º, 133, 116 y DDHH en tratados	No hay declaración de inconstitucionalidad, sólo inaplicación	Incidental
Interpretación más favorable	Todas las autoridades del Estado mexicano	Artículo 1º DDHH en tratados	Interpretar y usar la norma más favorable a la persona sin invalidar o inaplicar	Fundar y motivar

Interpretación por los jueces en tres pasos:

1.- Interpretación conforme en sentido amplio.

Todos los jueces y autoridades del Estado mexicano: **deben interpretar** el orden jurídico **a la luz** y conforme a los **derechos humanos** establecidos en la CPEUM y en los TI en los cuales el Estado mexicano sea parte, **favoreciendo** a las personas con **la protección más amplia**.

2.- Interpretación conforme en sentido estricto.

Cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de leyes, **preferir** aquella que **hace a la ley acorde** a los derechos humanos establecidos en la CPEUM y TI.

3.- Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.

No afecta o rompe con la lógica de la división de poderes y del federalismo, fortalece el papel de los jueces al ser **el último recurso** para asegurar la primacía y la aplicación efectiva de los **derechos humanos** establecidos en la CPEUM y los TI.

[...] **todas las autoridades del país**, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran **obligadas a velar** no sólo por los **derechos humanos** contenidos **en la Constitución Federal**, sino **también por aquellos** contenidos en los **instrumentos internacionales** celebrados por el Estado Mexicano, **adoptando la interpretación más favorable** al **derecho humano** de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como **principio pro persona**.

Estos **mandatos** contenidos en el **artículo 1o. constitucional**, ...**deben interpretarse** junto con lo establecido por el diverso **133** para determinar **el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio** en materia de **derechos humanos** a cargo del Poder Judicial, el que deberá **adecuarse al modelo de control de constitucionalidad** existente en nuestro país.

Décima Época, Registro: 160589, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, **Tesis: P. LXVII/2011(9a.)**, p. 535

Es en la **función jurisdiccional**, en donde **los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales**, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior.

Si bien los jueces **no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar** del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), **sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.**

¿Cómo se relacionan las “normas de derechos humanos” contenidas en tratados internacionales con la Constitución?

La nueva conformación del **catálogo de derechos humanos** no puede ser estudiada en términos de jerarquía,

Supremacía constitucionalidad: El texto del **artículo 1º** constitucional no puede ser interpretado de forma aislada y sin considerar los demás artículos constitucionales.

La **interpretación sistemática** toma en consideración las disposiciones constitucionales que guardan relación **con la ampliación del catálogo de derechos humanos** reconocidos en la Constitución.

Véanse las páginas 50-53

Debe considerarse que esta **fuerza vinculante** de **los criterios interpretativos** contenidos en **sentencias** interamericanas **debe extenderse** a aquéllas dictadas en casos en los que el Estado mexicano **no haya sido parte.**

**7. Control de constitucionalidad y control de convencionalidad.
Casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**

1. **Caso Alfonso Martín del Campo Dodd**, 3 de septiembre de 2004
2. **Caso Jorge Castañeda Gutman**, 6 de agosto de 2008
3. **Caso González y otras ("Campo Algodonero")**, 16 de noviembre de 2009. (Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez)
4. **Caso Rosendo Radilla Pacheco**, 23 de noviembre de 2009
5. **Caso Inés Fernández Ortega y otros**, 30 de agosto de 2010
6. **Caso Valentina Rosendo Cantú y otra**, 31 de agosto de 2010
7. **Caso Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores ("Los Ecologistas")**, 26 de noviembre de 2010

Antecedentes de la responsabilidad estatal del Estado Mexicano

Caso Rosendo Radilla Pacheco

Caso Inés Fernández Ortega y otros

Caso Valentina Rosendo Cantú y otra

Caso Cabrera García y Montiel Flores (“Los Ecologistas”)

Se alegaba que el **artículo 57** del Código de Justicia Militar (CJM) **violaba la CADH y las obligaciones** derivadas de ella que **el Estado** había adquirido, ya que establecía **el fuero de guerra** como **una regla** y no como una **excepción**, tal como debía ser de acuerdo a la **Convención**.



Se declaró que el artículo 57 del CJM era incompatible con la CADH y que el Estado debía modificarlo. Además se estableció la obligación del Estado de llevar a cabo el "Control de Convencionalidad" de acuerdo a la CADH.

- **Obligación** de realizar las **reparaciones particulares** de cada caso
- **Obligación** de modificar **el Código de Justicia Militar**
- **Obligación** de llevar a cabo **el Control de Convencionalidad**
- **Modificación del sistema de control de constitucionalidad a un control difuso de constitucionalidad** (sentencia Varios 912/2010)

TEPJF	Control de constitucionalidad/convencionalidad
SUP-JDC-695/2007, caso Hank Rhon	<ul style="list-style-type: none">• Determinar el alcance de lo establecido por el artículo 41 fracción VI y 42, párrafo III, de la Constitución Política del Estado de Baja California.• El primer artículo, permite que aquel que ocupa un cargo, empleo, o comisión, en el ayuntamiento, pueda ser votado como gobernador, siempre y cuando se separe del cargo que ocupa noventa días antes de la elección a Gobernador.• En el segundo de los preceptos citados, se establece que no podrán ser electos a esos cargos, los presidentes municipales, aún cuando se separen de su cargo.• La pregunta en este caso era la siguiente: ¿la limitación a ser votado en el segundo de los preceptos citados tiene sustento constitucional?• Se maximiza el derecho a ser votado, de acuerdo a normas internacionales.
SUP-JDC-11/2007, caso de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca.	<p>Postergación de celebración de asamblea indígena, es decir, se les violaba el derecho a poder elegir a sus autoridades a través de un decreto emitido por el Congreso Local que señalaba que no existían condiciones para realizar elecciones.</p> <p>Protege los derechos de autogobierno del pueblo indígena y el derecho a la tutela efectiva.</p>

SUP-JDC-98/2010, caso Orozco Sandoval

- **EL TEPJF** señaló que el actor **podía contender** por la gubernatura de Aguascalientes abanderado al Partido Acción Nacional (PAN), en consecuencia, revocó la resolución del **Instituto Electoral de Aguascalientes** que había **suspendido sus derechos político-electorales**, en virtud de haberse dictado el **auto de formal prisión por delito no grave**.
- La suspensión de los derechos políticos **debe ser valorada a la luz de otros principios y derechos** establecidos tanto en **la Constitución** como en **los Tratados Internacionales, la jurisprudencia**, es decir, **a partir del sistema jurídico** que regula el derecho a ser votado, por ejemplo:
 - a) La presunción de inocencia** (Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 11, párrafo 1; Convención Americana de Derechos Humanos artículo 8, párrafo segundo; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 26, párrafo primero)
 - b) El derecho a ser votado** (Convención Americana de Derechos Humanos artículo 23)
- De acuerdo a **la valoración de todas las normas el TEPJF** señaló que ese ejercicio **se apegaba al principio de interpretación conforme con la Constitución**.

<p>SUP-REC-02/2011, caso San Jerónimo Sosola.</p>	<p>Se analiza la inconformidad por inaplicación, que realizó la Sala Regional Xalapa, de la norma que establecía la edad mínima para acceder a un cargo. La Sala Superior señaló que se aplicó la legislación nacional sin tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales. La Sala Superior amplió su competencia para conocer de la inaplicación de leyes del sistema normativo indígena, que hayan realizado las Salas Regionales. Tesis XXII/2011</p>
<p>SUP-JDC-9167/2011, Caso Cherán</p>	<ul style="list-style-type: none">• Una interpretación conforme a favor de los derechos del pueblo indígena Purépecha de Michoacán, en la comunidad de Cherán para protegerles sus derechos a la libre autodeterminación y su autogobierno, en el SUP-JDC-9167/2011. La población de Cherán pedía elegir a sus gobernantes bajo el sistema de usos y costumbres, sin embargo al no estar reguladas en el estado de Michoacán, el Instituto Estatal Electoral, les informó que no tenía facultades para realizarlas. Por lo anterior, los actores se inconformaron ante el TEPJF.• Realizó el control de constitucionalidad a través de una interpretación conforme, a favor de los derechos del pueblo indígena Purépecha de Michoacán, en la comunidad de Cherán para protegerles sus derechos a la libre autodeterminación y su autogobierno.

SUP-REC-77/2012

Al respecto, esta Sala Superior considera que **deben prevalecer los principios de certeza y seguridad jurídica respecto del principio de legalidad** por aplicación de una norma de **equidad de género**, porque con independencia de lo correcto o incorrecto de la determinación de la Sala Regional Responsable, **ante lo avanzado del procedimiento electoral en curso, se genera mayor certidumbre con la confirmación de la sentencia** del Tribunal Electoral del Distrito Federal, precisamente, **porque optar por la prevalencia del principio de legalidad**, se propician **cambios** en las propuestas de **candidaturas**, en perjuicio **del derecho al voto**, tanto en su aspecto activo como pasivo.

SUP-REC-77/2012

En el aspecto pasivo, **porque la nueva candidata no podrá llevar a cabo actos de proselitismo electoral**, por estar **prohibido** por el artículo 312 del Código electoral local, que **prevé que durante los tres días previos a la jornada electoral no se pueden hacer actos de proselitismo**, y en el aspecto activo, porque a escasos días de que tenga verificativo la jornada electoral, los ciudadanos al votar desconocerían la identidad de la persona por la cual van a sufragar, y menos aún sobre sus propuestas y compromisos concretos, **por lo que un cambio de candidato** en la búsqueda de su representación **implica violación al principio de certeza.**

SUP-REC-77/2012

Todas las autoridades, entre ellas las encargadas de la impartición de justicia en materia electoral tienen **el deber** de velar por la protección de **los principios** constitucionales, por tanto, esta Sala Superior **considera que era deber ineludible** de la Sala Regional Distrito Federal **hacer la ponderación** entre **los principios de certeza y seguridad jurídica**, en contraste **con el de legalidad**, privilegiando **los primeros**.

SUP-JDC-641/2011

el artículo del estatuto del partido responsable era inconstitucional respecto a que no señalaba los tipos de sanciones y por otro lado, que las declaraciones emitidas por el militante habían rebasado sus derechos para poder expresarse respecto al partido al que pertenecía.

SUP-JDC-9167/2011

Caso. Cheràn, Michoacán.

1.- Tesis XXXVII/2011. COMUNIDADES INDÍGENAS. ANTE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN LEGAL DE SUS DERECHOS, DEBE APLICARSE LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

2.- Jurisprudencia 19/2012. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES CUANDO INAPLIQUEN NORMAS CONSUECUDINARIAS DE CARÁCTER ELECTORAL.

SUP-JDC-12624/2011

Garantizó que **la equidad** se reflejara en el ejercicio del cargo, así que **todos los suplentes que integraban el cuarenta por ciento de las fórmulas de candidatos del mismo género** debían pertenecer al mismo género que sus propietarios.

Tesis XXI/2012: EQUIDAD DE GÉNERO. INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

SUP-JDC-475/2012,
SUP-JDC-510/2012 y
SUP-JDC-611/2012

Convergían, el derecho de los ciudadanos de acceder a una candidatura a través de un proceso interno de selección **y los principios democráticos de equidad de género y de igualdad de condiciones** para el acceso a candidaturas a cargos de elección popular.

SUP-JRC-300/2011

Se impugnó una resolución del Tribunal Electoral del Distrito Federal, sobre el **plazo para la presentación de una demanda** si esta tenía que ver **con el proceso electoral o no**, y de eso **dependía el plazo** que debía correr para su presentación.

Tesis XII/2012

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS *PRO HOMINE* Y *PRO ACTIONE* (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

SUP-OP-11/2011.

Opinión emitida por la Sala Superior a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la **invalidez del artículo 7 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas**, en el cual se establecía que **quienes aspiraran** a ser registrados como **candidatos** a un cargo de elección popular debían someterse **a pruebas toxicológicas, psicológicas y poligráficas.**

En esta opinión la sala Superior **consideró inconstitucional** el artículo 7 del referido ordenamiento.

SUP-REC-180/2012

Si los candidatos recurrentes **plantean** que la Sala Regional responsable **inaplicó** diversas normas legales y constitucionales **debe reconocérseles que tienen legitimación**; estimar lo contrario implicaría una violación al **derecho de acceso a la justicia**, cuando su pretensión es que prevalezca su asignación como diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional

Jurisprudencia 3/2014

LEGITIMACIÓN. LOS CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, LA TIENEN PARA INTERPONER RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. [...] los candidatos a cargos de elección popular **tienen legitimación** para promover **el recurso de reconsideración** para controvertir la sentencia de la Sala Regional cuando les genere una afectación a sus derechos político-electorales, con el objeto de **garantizar** a los ciudadanos **una protección amplia a sus derechos fundamentales pues esas normas se deben interpretar extensivamente y potenciar el derecho subjetivo de acceso a la tutela judicial efectiva.**

SUP-REC-163/2012 se impugnó que la Sala Regional Toluca había realizado **un análisis incorrecto sobre la constitucionalidad** del artículo 265, fracción, II, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, y ello había generado **una indebida interpretación** del sistema de asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

Tesis XXVI/2012. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE PARA CONTROVERTIR SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES CUANDO EJERZAN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

SUP-REC-238/2012. la inaplicación de artículo 15 fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, en lo que se refería a la previsión de que no podía ser diputado local quien fuera **funcionario federal**, a menos que se separara definitivamente de su cargo, sesenta días naturales antes

SUP-JDC-1080/2013

Integración de órganos electorales federales.

SUP-REC-49/2013

Dos normas aplicables.

SUP-JRC-121/2013

Pueden impugnar los candidatos o candidatas.

Jurisprudencia 1/2014

CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

SUP-JDC-145/2013

Determinación del tribunal electoral local **de no ordenar la apertura de todos los paquetes electorales**, a pesar de haberse **acreditado la existencia de votos emitidos en boletas no autorizadas** por la autoridad administrativa electoral, resultado de **la interpretación** del artículo 226, fracción IV, del Código Electoral local, restringe el alcance de los principios constitucionales de certeza y autenticidad del sufragio, porque la forma de **dotar de certeza** a la elección **era ordenar el recuento de votos** en todas las casillas del municipio.

Jurisprudencia 5/2014

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CUANDO SE ADUZCA LA EXISTENCIA DE **IRREGULARIDADES GRAVES** QUE PUEDAN AFECTAR **LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES** EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ DE LAS ELECCIONES.— [...] el recurso de reconsideración resulta procedente cuando se aduzca la existencia de **irregularidades graves** que puedan vulnerar **los principios constitucionales y convencionales** exigidos para la validez de las elecciones, entre los que destacan los de **certeza y autenticidad**, respecto de los cuales se alegue que la Sala Regional responsable **no adoptó las medidas necesarias para garantizar su observancia y hacerlos efectivos**; [...]

SUP-JDC-145/2013

Lo anterior, tiene relevancia si el análisis que se realizó de la norma jurídica implicó la **interpretación directa de la norma constitucional, de sus principios y bases**, de manera tal que con ello el órgano jurisdiccional **definió su alcance o contenido** y esa **actividad hermenéutica** resulte, a juicio de los recurrentes, **restrictiva de los principios constitucionales**, en tanto que **una diversa interpretación** pudiera generar o propiciar **la expansión** de su **fuerza normativa y la vigencia de sus principios**.

Tesis XXVI/2012

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE PARA
CONTROVERTIR SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES
CUANDO EJERZAN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

Jurisprudencia 15/2018
SALA SUPERIOR

PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR
LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.

SUP-JDC-1749/2012

La parte actora planteó la **inconvencionalidad** del **artículo 41, Base III, Apartado A, penúltimo párrafo, de la Constitución Política** de los Estados Unidos Mexicanos, **ya que a su juicio vulneraba el derecho humano de libertad de expresión** consagrado en normas **convencionales.**

SUP-JDC-1774/2012

Tesis XXXIII/2012

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL DE ADQUIRIR TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN NO PUEDE SUJETARSE AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

SUP-RAP-003/2012

La Sala superior realizó **un ejercicio de ponderación** por un lado de las **libertades de expresión, asociación y reunión** y, por otra parte, **del principio de equidad** en la contienda, para establecer que **los “precandidatos únicos” debían evitar** que mediante **actos simulados** obtuviesen una **ventaja indebida** en la etapa de precampañas.

Jurisprudencia 46/2016
SALA SUPERIOR

PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y
VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS.

Jurisprudencia 31/2016
SALA SUPERIOR

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA
IMPUTACIÓN DE DELITOS CUANDO CON ELLO SE CALUMNIA A
LAS PERSONAS.

Jurisprudencia 19/2016
SALA SUPERIOR

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.

Jurisprudencia 18/2016
SALA SUPERIOR

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD
EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.

Jurisprudencia 11/2008
SALA SUPERIOR

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN
EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.

Jurisprudencia 14/2007
SALA SUPERIOR

HONRA Y REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE EL DESARROLLO DE UNA CONTIENDA ELECTORAL SE JUSTIFICA POR TRATARSE DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Tesis XXXVIII/2014
SALA SUPERIOR

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA LIMITACIÓN DE SU EJERCICIO
IMPUESTA A LOS MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO, ES
CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.

Tesis XII/2009
SALA SUPERIOR

CENSURA PREVIA. EXISTE CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUJETA, DE MANERA ANTICIPADA, LAS EXPRESIONES QUE SE HACEN EN LA PROPAGANDA POLÍTICA, A UNA RESTRICCIÓN DISTINTA A LAS PREVISTAS EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.

2021, © Derechos Reservados a favor del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Podrá utilizarse como cita de textos sin alteraciones, señalando la fuente y con la siguiente leyenda:

Escuela Judicial Electoral. 2021. “La ética en la interpretación convencional”, material didáctico de apoyo para la capacitación. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Queda prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

www.te.gob.mx
www.te.gob.mx/eje/

Facebook: Escuela Judicial Electoral
Twitter e Instagram: @TEPJF_EJE